Magistrado Ponente: Marcos Román Guío Fonseca
Número de Radicación: 13001310300920190025201
Tipo de Decisión: Modifica numeral 3° y revoca numeral 5° de la sentencia
Fecha de la Decisión: 30 de septiembre de 2022.
Clase y/o subclase de proceso: Verbal- Responsabilidad Civil Extracontractual

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SEGURO/La víctima del hecho dañoso reclame directamente a la aseguradora la indemnización de los perjuicios causados por el asegurado con motivo de la ocurrencia del siniestro.

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SEGURO/ Término prescriptivo.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD/CULPA PRESUNTA POR EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS/ Se presume la culpa de quien realiza la conducta, corresponde a la parte actora demostrar el hecho, el daño y la relación de causalidad, y a la parte demandada acreditar una circunstancia eximente de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero.

CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS/ La Jurisprudencia en tesis reciente, ha morigerado el tema al sostener que el juez debe ponderar cada caso para determinar la equivalencia en la potencialidad dañina de las actividades, pues de no darse, gravitará siempre a favor de la víctima la presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio.

REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN/ La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, que hay lugar a la misma, cuando la víctima no tuvo ninguna posibilidad de crear el riesgo que ocasionó el daño o de participar en su producción; pero sí tuvo la posibilidad de evitar la creación de su propio riesgo de exponerse imprudentemente al daño que otra persona generó.

HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO/ Como eximente de responsabilidad.

REPARACIÓN IN INTEGRUM/ Quien con su actuar culposo o doloso cause daño a otro debe resarcir todo el daño y nada más que el daño conforme al artículo 2341 del Código Civil, con independencia si la víctima sigue laborando con el mismo sueldo que devengaba o uno menor a futuro, debido a que aun así el daño a la salud persiste y la pérdida parcial de su capacidad laboral no desaparece.

LUCRO CESANTE/ Solo es requisito acreditar la disminución de la capacidad para laborar luego del suceso objeto del litigio para entrar a reconocer este valor.

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN/PRUEBA/Su reparación atiende a la afectación que experimente en sus relaciones interpersonales ante la imposibilidad de disfrutar del goce de la existencia y los placeres de la vida.

DAÑO MORAL/Para su tasación conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador, se deben tener en cuenta las particularidades especiales de cada caso, la intensidad de la lesión, la cercanía entre la víctima y sus familiares, y la extensión del perjuicio.

FUENTE FORMAL/Artículos 1081 y 1131 C.C., 2341, 2356, 2357, 2359 del Código Civil, artículos 94 226 del Código General del Proceso, artículos 2, 17 y 131 del Código Nacional de Tránsito.

FUENTE JURISPRUDENCIAL/ SC4904-2021 Radicación n° 66001-31-03-003-2017-00133-01 de 4 de noviembre de 2021, SC712-2022 de 25 de mayo de 2022, Radicación n.° 11001-31-03-015-2012-00235-01, sentencia STC8318 de 2017 y referida en T-281 de 2015, Sala de Casación Civil Expediente No. 11001 3103 038 2001 01054 01 de 24 de agosto de 2009 M.P. William Namen Vargas, CSJ, sal. Cas. Civil, sent. Jul. 6/45 referida en sent. en. 31/05, CSJ, Sal. Cas. Civil, sent. 14 oct./04, exp. 7637, sent. 26 nov./99, exp. 5220 y sent. 31 en./05 exp. 3001-03, Corte Suprema de Justicia Sentencia SC002-2018 de 12 de enero de 2018, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC5885-2016, sentencia CSJ SC, 18 Dic. 2012, Rad. 2004-00172, CSL. SC 6185-2014 de 16 de mayo de 2014, Exp. 08001-31-03-011-2008-00263-01, CSJ Sentencia SC5686-2018, Sentencia SC3919 de 2021.

**-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL - FAMILIA**

**Magistrado Sustanciador
MARCOS ROMÁN GUÍO FONSECA**

Apelación de Sentencia
Proceso: Verbal- Responsabilidad Civil Extracontractual
Demandante: Ana Lucia Duarte Almario y otros
Demandado: Transportes Montero S.A., y otros
Radicación Única: 13001310300920190025201

Cartagena de Indias D.C. y T., treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022). *(Proyecto discutido y aprobado en sesión no presencial de 27 de septiembre de 2022)*

Se entra a resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandante, y por las demandadas TRANSPORTES MONTERO S.A. y EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., contra la sentencia de 8 de junio de 2022, proferida por el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido por ANA LUCIA DUARTE ALMARIO y ELÍCEO EULOGIO FERNÁNDEZ contra EDWIN QUIROZ VILLALOBOS, RICARDO GÓMEZ BOTERO, EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y TRANSPORTES MONTERO S.A.

I. ANTECEDENTES

1. ANA LUCIA DUARTE ALMARIO y ELÍCEO EULOGIO FERNÁNDEZ, por conducto de apoderado judicial, promovieron proceso de responsabilidad civil extracontractual contra EDWIN QUIROZ VILLALOBOS, RICARDO GÓMEZ BOTERO, EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y TRANSPORTES MONTERO S.A., solicitando, en síntesis:

a. Se declare responsable a EDWIN QUIROZ VILLALOBOS, en su calidad de conductor del vehículo automotor de placas WBB-485, por

el incumplimiento de las normas de tránsito con ocasión al accidente con la motocicleta de placas DAK-828.

b. Como consecuencia, se condene solidariamente a los demandados al pago del daño emergente y lucro cesante presente y futuro a favor de la demandante ANA LUCIA DUARTE ALMARIO.

c. Condenar al pago del daño moral y daño a la vida de relación en favor de los demandantes.

d. Suspender por el término de 3 meses la licencia de conducción de EDWIN QUIROZ VILLALOBOS.

e. Se condene en costas y agencias en derecho a los demandados.

Como soporte fáctico de las pretensiones, se compendia:

1) El 13 de febrero de 2010, a las 14:30 PM, dentro de la zona de abastecimiento de combustible de la estación ESSO BOMBA EL AMPARO, se generó un accidente de tránsito, donde se vieron involucrados la motocicleta de placas DAK-82B, en la que se trasportaba como parrillera ANA LUCIA DUARTE ALMARIO y de propiedad de JUAN MANUEL GÓMEZ NAVARRO y, la buseta de placa WBB 405 propiedad de RICARDO ANTONIO GÓMEZ BOTERO, conducido por EDWIN QUIROZ VILLALOBOS.

2) Que la motocicleta iba saliendo por el lugar permitido al momento del abastecimiento de combustible, cuando de manera sorpresiva fue embestida dentro de la estación de gasolina, por el vehículo de placa WBB 405 conducido por EDWIN QUIROZ VILLALOBO.

3) Que la conducta desplegada por el conductor de la buseta al conducir por el área exclusiva para el abastecimiento de combustible y

prestando el servicio público de pasajeros, conllevó a la colisión en la que resultó lesionada ANA LUCIA DUARTE ALMARIO.

4) La víctima sufrió secuelas médico legales de 120 días, con deformidad física permanente, perturbación funcional de órgano permanente, perturbación funcional de miembro permanente, y perturbación psíquica permanente, por lo que, se abrió indagación que cursa en la Fiscalía Local 5 con funciones de conocimiento de Cartagena.

5) Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, determinó que la demandante ANA LUCIA DUARTE sufrió una incapacidad permanente del 25.15%.

6) El accidente ha traído cambios en la vida de los demandantes, ya que se han generado repercusiones negativas en el ámbito matrimonial, asimismo, ha ocasionado la imposibilidad de realizar actividades cotidianas.

7) Para la fecha de ocurrencia del accidente, el vehículo de placa WBB-405 prestaba un servicio público y se encontraba afiliado a la empresa TRANSPORTES MONTERO S.A., por lo que debe responder de manera solidaria como guardián del vehículo.

8) Para la atención médica de la lesionada, y por existir concurrencia de vehículo, se afectó la póliza de seguros obligatorios para daños corporales (SOAT) de la motocicleta de placas DAK 82B, se atendió gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios e incapacidad permanente.

9) Para el momento del accidente DUARTE ALMARIO trabajaba como mercaderista y recibía un salario mínimo de \$ 515.000.

10) El 8 de septiembre de 2014, se presentó a la COOPERATIVA ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS GENERALES S.A., reclamación del siniestro, lo que interrumpió la prescripción de la acción, la cual fue objetada por dicha entidad el 6 de octubre de 2014.

2. Una vez notificados los demandados, se efectuaron los siguientes pronunciamientos:

2.1. EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., a través de apoderado judicial contestó la demanda, manifestando no constarle la mayoría de los hechos y se opuso a las pretensiones. Formuló objeción al juramento estimatorio. A su vez, propuso las excepciones de mérito: (i) prescripción de la acción directa en contra de la Equidad Seguros Generales O.C.; (ii) el informe policial de accidente de tránsito no constituye plena prueba; (iii) ausencia de cobertura de la póliza No. AA012230; (iv) que los hechos materia de debate configuren la existencia de un siniestro y tengan cobertura en los términos de la póliza No. AA012230; (v) Límite asegurado y aplicación de deducible pactado; (vi) existencia del valor asegurado; (vii) que no se configure ninguna de las causales de exclusión y, (viii) los perjuicios hipotéticos o eventuales no son indemnizables”.

2.2. TRANSPORTES MONTERO S.A., no contestó la demanda

2.3. EDWIN QUIROZ VILLALOBOS y RICARDO ANTONIO GÓMEZ BOTERO, representados por curador *ad litem*, manifestó no constarle los hechos de la demanda, no se opuso a las pretensiones ni formuló excepciones de mérito.

3. Mediante auto de 26 de enero de 2022, el juzgado de conocimiento decretó prueba trasladada al oficiar a la FISCALÍA LOCAL

5 DE CARTAGENA para que remitiera todos los elementos materiales probatorios que obren al interior del proceso con radicado No. 13001600112820100191400.

II. EL FALLO DE INSTANCIA

La Jueza de instancia decidió, primero, declarar no probadas las excepciones de prescripción de la acción directa en contra de la aseguradora, informe policial de accidente de tránsito no constituye plena prueba, ausencia de cobertura de la póliza No. AA012230, que los hechos materia de debate configuren la existencia de un siniestro y tengan cobertura en los términos de la póliza no. aa012230, existencia del valor asegurado, que no se configure ninguna de las causales de exclusión, los perjuicios hipotéticos o eventuales no son indemnizables y probada la de límite asegurado y aplicación de deducible pactado, formulada por la demandada EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

En segundo lugar, declaró civilmente responsable a EDWIN QUIROZ VILLALOBOS y en forma solidaria a RICARDO GÓMEZ BOTERO, TRANSPORTES MONTERO S.A. por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido a la señora ANA LUCIA DUARTE ALMARIO el 13 de febrero de 2010. Y como consecuencia de ello, en el numeral tercero, condenó a EDWIN QUIROZ VILLALOBOS, RICARDO GOMEZ BOTERO, TRANSPORTES MONTERO S.A., a pagar las siguientes sumas de dinero, más intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de esta sentencia hasta que se verifique su pago, a la tasa del 6% anual:

“Perjuicios patrimoniales

- A favor de la demandante ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$7.500.000,00).

Perjuicios extrapatrimoniales

- A favor de la demandante ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$7.500.000,00) por concepto de daño moral y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$7.500.000,00) por concepto de daño a la vida en relación.

- A favor del demandante ELICEO EULOGIO FERNANDEZ, la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000,00) por concepto de daño moral.”

En el numeral cuarto del proveído proferido, condenó a EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. al pago de la condena impuesta hasta el límite del valor asegurado. Y finalmente, en el numeral quinto, negó las demás pretensiones.

Afirmó, que la ocurrencia del hecho fue debidamente acreditada a partir del informe de accidente de tránsito visible a folio 57 del expediente, el cual dio cuenta de la fecha de acaecimiento del siniestro, e individualizó a los vehículos involucrados, situación que fue confirmada con las declaraciones de ENITH FERNÁNDEZ LAMBRAÑO y el agente de tránsito MANUEL E. PASTRANA, así como el interrogatorio absuelto por la demandante ANA LUCIA DUARTE ALMARIO.

En cuanto al daño, concluyó, que las lesiones de ANA LUCIA vienen apoyadas con la historia clínica, el informe pericial de clínica forense, y el dictamen de pérdida de la capacidad laboral por invalidez del 25.15%.

Con relación al nexo causal, partió de la presunción de culpas, concluyendo, que en el asunto quedó suprimida la concurrencia de actividades peligrosas, ya que la conducta de la demandante y víctima

directa ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, fue pasiva en la producción de los hechos, pues se transportaba como pasajera, aparte que ninguno de los demandados alegó alguna de las causas extrañas para eximir su responsabilidad.

Por otra parte, encontró demostrado que GUILLERMO CASTILLO CÁRDENAS, conductor de la motocicleta DAK82B, no poseía licencia de conducción, por lo que, estimó que su conducta fue imprudente y contribuyó en la producción del resultado, empero, no fue suficiente para desvirtuar la presunción de culpa del conductor del vehículo de servicio público. En ese sentido, graduó la tasación del daño al 50% por la intervención en el resultado de un tercero.

Frente a la excepción de prescripción, advirtió que, la misma no está llamada a prosperar pues el término de prescripción fue interrumpido el 8 de septiembre de 2014 a través de requerimiento expreso del apoderado de los demandantes, en ese entendido, el término para incoar la acción contra la aseguradora fenecía el 8 de septiembre de 2019, comoquiera que es aplicable la prescripción extraordinaria de 5 años, sin embargo, la demanda fue presentada en julio de 2019.

Respecto a la excepción que el informe pericial de accidente de tránsito no constituye plena prueba, señaló, que las circunstancias en que ocurrieron los hechos fueron igualmente sustentadas por testimonios de los cuales emergió la reunión de los elementos de hecho, daño y nexo causal.

En cuanto a la excepción “ausencia de la póliza N°Aa012230, y los hechos materia de debate configuren la existencia de un siniestro y tengan cobertura en los términos de la póliza N°Aa012230 y que no se

configure ninguna de las causales de exclusión”, no están llamadas a prosperar, por cuanto se acreditó la responsabilidad del conductor y los hechos invocados se enmarcan en el numeral 1 de las condiciones generales como siniestro asegurado, además, las circunstancias establecidas en el numeral 2 de las exclusiones no aplican al caso.

En relación con la excepción límite asegurado y aplicación de deducible pactado, dijo que, la póliza N°Aa012230 establecía coberturas por lesiones o muerte de una persona a un valor asegurado de 60SLMV, por lo que, EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. fue condenado solo hasta el límite del valor asegurado, añadiendo que, la aseguradora no acreditó contingencias con cargo a la póliza que representaran una disminución en el saldo del valor asegurado.

Frente a los perjuicios, estimó que el daño emergente se encuentra debidamente acreditado, no siendo el mismo objetado por los demandados, sin embargo, consideró que el anticipo de honorarios de abogados debe ser teniendo en cuenta en liquidación de costas y agencias en derecho, indistintamente de la liberalidad de las partes en el pacto de los correspondientes honorarios.

Y del lucro cesante consolidado y futuro, señaló que, el mismo no pudo ser tenido en cuenta, ya que mediante interrogatorio DUARTE ALMARIO confesó haber laborado entre la fecha en que se produjo el accidente y la actualidad, por lo que, si bien existe una pérdida de capacidad laboral del 25.15%, la víctima no ha sido impedida en su productividad, como tampoco ha dejado de percibir la asignación salarial correspondiente.

Frente al daño moral, lo encontró demostrado ante la lesión sufrida por la víctima directa ANA LUCIA DUARTE, la cual, la afectó de

manera permanente, así como el dolor padecido; de la misma forma, estimó que ELÍCEO EULOGIO FERNÁNDEZ, en su condición de cónyuge de la demandante, también se vio afectado en su esfera interna con la lesión física sufrida por aquella.

Por otra parte, consideró que se encontraba acreditado el daño a la vida de relación de la demandante ANA DUARTE ALMARIO, en atención a la deformidad sufrida en una de sus extremidades inferiores, lo que la ha limitado a realizar actividades que antes desarrollaba, lo cual, fue sustentado por los interrogatorios y el testimonio de ENITH FERNÁNDEZ LAMBRAÑO. Sin embargo, no se logró probar el daño a la vida de relación de su cónyuge.

Y finalmente, en lo que respecta a la objeción al juramento estimatorio, no prosperó al considerar que no existían errores de cálculo o sobreestimación de cuantía, ya que para la estimación solo fueron tenidos en cuenta los perjuicios patrimoniales y el demandante mencionó extrapatrimoniales por lealtad procesal.

III. LA APELACIÓN

1. Mediante proveído de 12 de julio de 2022 fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y las demandadas TRANSPORTES MONTERO S.A., y EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., atendiendo lo dispuesto en el 14 del Decreto 806 de 2020, otorgando el término de 5 días para sustentar su recurso.

1.1 Los demandantes realizaron la sustentación del recurso el 21 de julio de 2022, así que, atendiendo los reparos concretos formulados ante la Juez de instancia, se sintetizan:

- La *a quo* incurre en contradicción al aplicar la reducción de indemnización frente a la conducta concurrente de la víctima, desconociendo los parámetros de la presunción de culpa y el análisis probatorio efectuado a la calidad en la cual se transportaba ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, como parrillera, lo que traduce en que la víctima no tuvo injerencia en la producción del daño, ya que la responsabilidad le es atribuida a la conducta imprudente del conductor de la buseta de placas WWB 405, EDWIN QUIROZ, en consecuencia, no operan las circunstancias de que trata el artículo 2357 ibidem, debido a que la víctima no tuvo injerencia en la producción de las lesiones, y mucho menos ejercía una actividad considerada peligrosa.

Y la parrillera no sabía y mucho menos debía saber, que el conductor de la motocicleta no contaba con licencia, dado que no ejerce funciones administrativas, y además, está probado que la causa adecuada del hecho dañoso proviene única y exclusivamente por una conducta imprudente del conductor de la buseta de placas WWB 405, lo que demuestra que la reducción al reconocimiento de la indemnización no resulta ser procedente.

- En cuanto a los perjuicios, sostiene que el daño emergente se encontraba debidamente acreditado, no siendo el mismo objetado por las partes, empero, la juez de instancia aplicó la reducción o graduación del indemnizatorio por la intervención en el resultado de un tercero en un 50% de la tasación del daño, ante una excepción que no fue demostrada.

- En relación al lucro cesante, indicó que con la demanda se aportaron pruebas documentales, las cuales no fueron tachadas ni desconocidas, por ninguna de las partes, tales como el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, que determinó

que ANA ALICIA DUARTE ALMARIO, sufrió una incapacidad permanente parcial de su capacidad labora del 25,15%, y tiene una deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional de órgano de locomoción de carácter permanente, con una incapacidad médico legal definitiva de 90 días; con lo que se prueba la afectación en la salud de la actora.

Y, si bien la demandante manifestó recibir un ingreso mensual, no quiere decir que el mismo está reducido por la pérdida de capacidad laboral, puesto que, la pretensión de la indemnización por lucro cesante está basada en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

- Con respecto a los perjuicios morales y daño a la vida de relación, la jueza incurrió en indebida valoración, especialmente, al no reconocer este último a ELÍCEO EULOGIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ a pesar de que mediante interrogatorios, se estableció la afectación de la esfera familiar por las lesiones que sufrió su cónyuge, además, le redujo el 50% de la indemnización reconocida a la víctima directa.

1.2. EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., sustentó el recurso de alzada el 21 de julio de 2022, así que, atendiendo los reparos concretos formulados ante la *a quo*, se sintetizan:

- Que operó la prescripción en el contrato de seguros, ya que el siniestro ocurrió el 13 de febrero de 2010, por lo que, el término para incoar la acción vencía el 13 de febrero de 2015, sin embargo, la demanda solo fue presentada hasta el 17 de julio del 2019.

- El fallador de instancia incurrió en una indebida valoración de las conductas de las partes, ya que tiene como cierto que el conductor del vehículo de servicio público (EDWIN QUIROZ VILLALOBOS), actuó de manera imprudente, mientras que, el conductor de la motocicleta

GUILLERMO CASTILLO CÁRDENAS, no poseía licencia de conducción, lo cual es un acto imprudente generador de culpa, además, señaló que, los conductores de la motocicleta y del vehículo realizaban actividad peligrosa, con la diferencia que EDWIN QUIROZ VILLALOBOS portaba licencia de conducción.

Que se puede afirmar que la “CULPA O HECHO EXCLUSIVO” del mototaxista y de la misma víctima, al estar como pasajera del vehículo tipo motocicleta, por lo que se demostraría que la causa del accidente fue por el comportamiento del motociclista, quien se desplazaba por un lugar donde se requería conducir con prudencia y pericia.

Agrega, que el motociclista incumplió las normas de tránsito y realizó un desplazamiento imprudente, lo que sería la causa determinante del accidente; y la parrillera, asumió el riesgo excepcional al transportarse como parrillera en la motocicleta.

- Falta de responsabilidad de EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., debido a que ninguna de las instituciones de responsabilidad aquiliana es aplicable al asegurador, ya que no fue por un hecho propio que ocurrió el supuesto accidente, ni por el hecho de alguno de sus dependientes, razón por la cual, si no existe un factor de atribución de la responsabilidad no pueden acogerse las pretensiones de la demanda en su contra.

Los reparos relativos a la inexistencia de solidaridad, límite de la eventual responsabilidad o de la eventual obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora y a favor de los demandantes: valor asegurado, obligación condicional del asegurador, cobro de lo no debido, y las exclusiones de amparo expresamente previstas en las condiciones

generales de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, no fueron sustentados en esta instancia.

1.3. La EMPRESA TRANSPORTES MONTERO S.A. igualmente lo sustentó en tiempo el 26 de julio de 2022, así que, en concordancia con los reparos presentados ante la Juez de conocimiento, se sintetizan:

- La juez incurrió en una errónea valoración e interpretación del informe de tránsito y la declaración del agente de tránsito que atendió el accidente, quien manifestó que el conductor de la motocicleta no poseía licencia de conducción y que el accidente no ocurrió al interior de la estación de gasolina, lo cual, observa en el croquis en el que aprecia el punto exacto donde ocurrió el siniestro, y también demuestra que la motocicleta invadió el carril donde transitaba el vehículo de placas WBB-405, generando así el accidente.

Con base en lo anterior, considera que la a quo incurrió en error al determinar que la conducta y responsabilidad del tercero GUILLERMO CASTILLO CÁRDENAS, conductor de la motocicleta de placas DAK82B, no es suficiente para atribuirle la culpa exclusiva en la causación del daño.

- Que el anterior yerro desemboca en otro equívoco, el imputar indebidamente como autor del daño a EDWIN QUIROZ VILLALOBO, conductor de la buseta de placas WBB 405, cuando el daño se causó por la imprudencia, impericia y negligencia del tercero Guillermo Castillo Cárdenas, conductor de la motocicleta de placas DAK82B, quien al momento de los hechos no solo se encontraba realizando una actividad de transporte ilegal, sino que no estaba calificado para conducir dicho vehículo, puesto que no tenía la respectiva licencia de conducción.

2. La parte demandante describió el traslado del escrito de sustentación de EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., formulando reparo concreto sobre la excepción de prescripción del contrato de seguro, al señalar que la misma no está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que el 8 de septiembre de 2014, interrumpió el término de prescripción al presentar reclamación directa ante la aseguradora, por lo que, a la fecha de incoar la acción contra los demandados en julio de 2019, solo habían transcurrido 4 años y 10 meses.

IV. CONSIDERACIONES

1. En cuanto a los presupuestos procesales necesarios para adoptar una decisión de fondo, fueron analizados y valorados por el juez de instancia, así que por brevedad se dan por reproducidos.

2. El primer embate propuesto por EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., lo hace consistir en que operó el fenómeno prescriptivo en el contrato de seguros, comoquiera que el siniestro ocurrió el 13 de febrero de 2010, por lo que, el término para incoar la acción vencía el 13 de febrero de 2015, sin embargo, la demanda solo fue presentada hasta el 17 de julio del 2019.

Con miras a dar una respuesta frontal al cargo, la Sala parte por decir, que la acción promovida por los demandantes contra EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., corresponde a la denominada "*responsabilidad civil del seguro*", creada con el propósito de que la víctima del hecho dañoso reclame directamente a la aseguradora la indemnización de los perjuicios causados por el asegurado con motivo de la ocurrencia del siniestro. En este caso, cuando la víctima elige emprender su acción indemnizatoria directamente contra la aseguradora, como aquí acontece, el término prescriptivo de la acción

es de 5 años, contados desde que ocurre el siniestro o el hecho imputable al asegurado como lo prescriben los arts. 1081 y 1131 C.C., pues bien ha dicho la Corte:

(...) el artículo 1131 idem, concerniente, igualmente, con el instituto de la prescripción, concretamente, con el seguro de responsabilidad civil, fijó un referente adicional que, sin duda, incide decididamente en la clase de extinción del derecho y el destinatario de la misma. A partir de esta concurrencia normativa fueron naciendo importantes criterios sobre qué clase de prescripción debía aplicarse a la víctima y desde cuándo contaba el mismo.

(...)

De la evocación efectuada surgen prontamente y sin dubitación alguna, postulados de las siguientes características: i) la prescripción prevista en el artículo 1131 del C. de Co., en tratándose de un seguro de responsabilidad civil, cuando la víctima acciona es, sin duda, de cinco años, o sea, la extraordinaria; ii) que, por lo mismo, la consagración de dicho aspecto temporal deviene, claramente, demarcada por matices objetivos y no subjetivos; iii) esto último significa que el término cuenta a partir del acaecimiento del siniestro o el hecho imputable al asegurado, independientemente que lo haya conocido o no el afectado; además, corre frente a toda clase de personas, inclusive los incapaces.

Aflora así mismo y de manera incontestable, que tratamiento normativo de semejante talante impone la concurrencia de un elemento imprescindible, definitivo, en verdad, para fijar el sentido de la decisión reclamada, como es que la víctima haya sido quien acometió la acción judicial en contra de la aseguradora, o sea, comporte el ejercicio de un accionar directo (artículos 84 y 87 de la Ley 45 de 1990); en otros términos, los efectos favorables que el actor pretende derivar de la norma invocada podrán producirse siempre y cuando la litis involucre como demandante al agredido y como demandada a la aseguradora y, por supuesto, concierna con el seguro de responsabilidad civil (...). (Subraya intencional)”¹

Por manera que, siendo la misma víctima quien directamente ejercita la acción de responsabilidad para que la aseguradora indemnice los daños y perjuicios ocasionados, la única prescripción que tiene cabida es la extraordinaria prevista en el inciso tercero del art. 1081 del Código de Comercio y, el detonante para contabilizarla es desde el momento que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, como lo precisa el art. 1131 *ibidem*.

¹ Aparte citado en sentencia SC4904-2021 Radicación n° 66001-31-03-003-2017-00133-01 de 4 de noviembre de 2021.

Bajo tales premisas, si el hecho dañino ocurrió el 13 de febrero de 2010, a la fecha de presentación de la demanda – 17 de julio de 2019- (fl.205 C1) y notificación a EQUIDAD SEGUROS O.C., -1 de octubre de 2019- (fl 206 respaldo C1), ya había pasado su cuenta de cobro el fenómeno prescriptivo como lo refirió el recurrente.

Con todo, pasa por alto el opugnante, que el inciso final del artículo 94 el Código General del Proceso, introdujo un nuevo supuesto de interrupción civil de la prescripción, distinto a la presentación de la demanda previsto en el artículo 2539 del Código Civil, que se produce mediante un **«requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor»**, el cual debe cumplir con una serie de exigencias tal como lo ha reconocido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“(i) El requerimiento extrajudicial debe involucrar un derecho autoatribuido, es decir, una expresión de voluntad de quien se asume como titular de un derecho sustancial, orientada directa y reflexivamente a que otra persona se comporte de manera consistente con ese derecho. Así, por ejemplo, el acreedor cambiario puede dirigir un escrito a su deudor, instándolo a que sufrague el crédito incorporado en un cartular; o la víctima de un accidente de tránsito al agente dañador, reclamándole la indemnización de los daños atribuibles a su conducta lesiva. (resalte fuera de texto)

Naturalmente, la interrupción operará frente a las acciones relacionadas con esa autoatribución, como lo serían, en las hipótesis antes propuestas, la acción cambiaria y la ordinaria de responsabilidad civil, en su orden.

(ii) Esta clase de interrupción civil opera en el momento en el que el deudor conoció, o razonablemente debió conocer, del requerimiento efectuado por su acreedor. Lo anterior se explica porque, siguiendo el precedente de esta Corporación,

«(...) la prescripción extintiva y su forma civil de interrupción (...) reclama, necesariamente, un acto de comunicación a quien puede llegar a beneficiarse de aquella, de modo que, en virtud de ese enteramiento, el deudor quede advertido que su acreedor está presto a ejercer el derecho, y que, por tanto, no existe espacio para aprovecharse del tiempo, ni mucho menos de una eventual desidia (...). Los actos que no trascienden la órbita del acreedor, aquellos que permanecen en la periferia del deudor y que, por ende, son ignorados por él, no pueden tener la virtualidad de interrumpir la prescripción. Por eso, entonces, para que ciertamente la demanda sea útil al propósito de truncar el plazo

prescriptivo, debe ser trasladada al deudor demandado» (CSJ SC, 1 jun. 2005, rad. 7921; reiterada en CSJ SC1131-2016, 5 feb.).

Cabe precisar que los apartes transcritos se refieren a la interrupción civil que se deriva de la presentación de la demanda –y su posterior notificación–, pero los principios jurídicos sobre los que se funda el raciocinio de la Corte, relacionados con la necesidad de hacer saber efectivamente al obligado las determinaciones adoptadas por su acreedor con relación a la prestación debida, resultan aplicables al supuesto que prevé el inciso final del citado artículo 94.

*(iii) Es indudable que el «requerimiento escrito» del que se viene hablando puede incorporarse en un mensaje de datos, y remitirse al destinatario a través de cualquier medio electrónico idóneo. Lo anterior en tanto que, a voces del artículo 6 de la Ley 527 de 1999, «cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, **ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos**, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta». En este escenario, igualmente deberá acreditarse que el destinatario conoció, o tuvo la posibilidad de conocer, el contenido del requerimiento privado remitido por medios electrónicos.*

(iv) Siguiendo las reglas generales, la comunicación del requerimiento privado al sujeto pasivo de la relación sustancial impondrá que el término de prescripción no consumado reinicie su cómputo, efecto interruptivo que solo puede verificarse «por una vez»².

Y en efecto, en el asunto que concita el estudio de la Sala, los demandantes elevaron ante EQUIDAD SEGUROS GENERALES S.A., reclamación de perjuicios por las lesiones de ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, escrito recibido el 8 de septiembre de 2014, acto positivo que produce como efecto la interrupción civil a la prescripción.

Ahora, siguiendo la tesis de la Corte Suprema de Justicia que viene pregonando que cuando se trata de la interrupción civil no se contabiliza un nuevo término conforme al inciso final del artículo 2536 del Código Civil, debido al actuar de la parte interesada en hacer valer el derecho, la que se mantiene hasta la terminación del proceso, se tendría que decir, que por extensión se aplicaría a la nueva forma de interrupción, lo que mantendría la interrupción hasta el final del proceso. En términos de la Corte:

² Sentencia SC712-2022 de 25 de mayo de 2022, Radicación n.º 11001-31-03-015-2012-00235-01

Es entendido que la posibilidad de iniciar nuevamente y de inmediato el cómputo del término extintivo, prevista en el inciso final del artículo 2536 de Código Civil respecto de la interrupción o la renuncia de la prescripción, no aplica cuando se trata de interrupción civil, o cuando la prescripción se entiende renunciada por la omisión del deudor en interponer oportunamente la excepción respectiva. Los efectos de la interrupción civil, que además descarta la inactividad del acreedor, o de la no interposición oportuna de la mencionada defensa judicial, son definitivos dentro del proceso en el cual ocurren, hasta su terminación mediante sentencia, pago o cualquiera de las formas anormales o alternativas de finalización permitidas por la ley, atendida la naturaleza de cada proceso y las consecuencias propias de dichas formas especiales en punto a la eficacia o ineficacia de la interrupción (artículo 91 del Código de Procedimiento Civil; sentencias C-662 de 2004 y C-227 de 2009) (Sentencia 9 de septiembre de 2013, exp. 11001-3103-043-2006-00339-01)³.

Y aun acogiendo la postura contraria, al contabilizar nuevamente el término prescriptivo de los 5 años, se llegaría a la misma conclusión, debido a que el libelo introductorio se presentó el 17 de julio de 2019 y el nuevo cómputo fenecería el 9 de septiembre de 2019, máxime cuando la asegurado se notificó dentro del año como lo prevé el art. 94 del C.G.P. -1º de octubre de 2019-, luego, el actor del titular del derecho fue diligente al formular la demanda dentro del nuevo término, se *itera*, bajo el entendimiento que en estos casos de interrupción civil no sea posible predicar la tesis de la Corte, lo que impide la prosperidad del cargo.

En cuanto a los demás reparos formulados por la aseguradora, al ser coincidentes con los formulados por el otro demandado se analizarán en conjunto.

3. Ahora, los reproches formulados por la EMPRESA TRANSPORTES MONTERO S.A. y la misma EQUIDAD SEGUROS GENERALES S.A., apuntan a desvirtuar los presupuestos axiológicos de la responsabilidad civil extracontractual, en cuanto a la valoración de algunos medios probatorios y culpa exclusiva de un tercero.

³ Así lo reiteró en sentencia STC8318 de 2017 y referida en T-281 de 2015

Como aspecto medular, la Sala parte por decir, que la obligación de indemnizar perjuicios puede tener su génesis en la comisión de un delito o culpa como lo prevé el artículo 2341 del Código Civil, evento en el cual estamos frente a una responsabilidad extracontractual, en tal caso, para salir airoso en las pretensiones se deben probar los presupuestos estructurales de la acción decantados de vieja data por la jurisprudencia como la culpa, el daño y la relación causal entre aquella y este⁴.

Pero no se trata de una regla absoluta, ya que existen ciertos eventos, en donde a la víctima se le alivia la carga probatoria, estableciendo presunciones, como en tratándose de actividades conocidas como peligrosas, dentro de las que se encuentra la conducción de vehículos, en aplicación a lo reglado por el artículo 2356 *Ibidem*, que siendo *iuris tantum* puede ser desvirtuada por el demandado probando fuerza mayor o caso fortuito, culpa de un tercero o culpa de la víctima⁵.

En torno a este tópico ha dicho la Corte:

*“La Corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las actividades peligrosas bajo el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del que legalmente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo la responsabilidad en el hecho causante del daño padecido cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial, circunstancia que se explica de la situación que se desprende de la carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente tiene el deber de acreditar la configuración o existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con la demostración de la ocurrencia de **caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero.**”⁶*

⁴ CSJ, Sala de Negocios Generales, Sent. junio 10/63.

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 29 de octubre de 1979.

⁶ Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Expediente No. 11001 3103 038 2001 01054 01 de 24 de agosto de 2009 M.P. William Namen Vargas. Igualmente, SC002-2018/2010-

Sin embargo, frente a la concurrencia de actividades peligrosas, la jurisprudencia no ha sido pacífica, en algunos eventos, ha pregonado de manera certera la neutralización o aniquilamiento de las presunciones⁷, pero en tesis más reciente, ha morigerado el tema al sostener que el juez debe ponderar cada caso para determinar la equivalencia en la potencialidad dañina de las actividades, pues de no darse, gravitará siempre a favor de la víctima la presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio⁸, pues bien ha dicho la Corte:

Empero, suele ocurrir que ambas partes concurren al hecho dañoso desplegando sendas actividades peligrosas, evento en el cual las presunciones de culpa que operan en contra de cada una de ellas pueden aniquilarse mutuamente, forzando al actor a demostrar la culpa del accionado; sin embargo, para que así acontezca, es decir, para que tal anulación pueda desgajarse, es menester que medie una concienzuda labor de ponderación del juzgador, según lo clarificó esta Corporación en la sentencia que profirió el 5 de mayo de 1999, pues "la aniquilación de la presunción de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generación de un daño, presupone que el juez advierta, previamente, que en las específicas circunstancias en las que se produjo el accidente, existía cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitará siempre a favor de la víctima la presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparación demanda". Esto es, que incumbe al juez, en lugar de desgajar ciega y maquinalmente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece a la víctima de una actividad peligrosa por el hecho de ejercitar, a su vez, otra de la misma especie, examinar en cada caso concreto la naturaleza de ambas, los medios utilizados por los implicados, la peligrosidad que cada actividad entraña frente a los demás, y solamente cuando advierta que existe cierta equivalencia, podrá anular la aludida presunción (CSJ, Sal Cas. Civil, sent. 2 de may. /07, exp. 03001-01, Pte. Pedro Octavio Munar Cadena).

Para el caso bajo estudio, se advierte que, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales se produjo el accidente que generó las lesiones a la demandante, no se configura una concurrencia propiamente dicha de actividades peligrosas, por la potísima razón que la víctima, se desplazaba como pasajera del

00578 12 de enero de 2018, Pte Dr. Ariel Salazar Ramírez y SC13925-2016/2005-00174 Pte Dr. Ariel Salazar Ramírez

⁷ CSJ, sal. Cas. Civil, sent. Jul. 6/45 referida en sent. en. 31/05

⁸ CSJ, Sal, Cas. Civil, sent. 14 oct./04, exp. 7637, sent. 26 nov./99, exp. 5220 y sent. 31 en./05 exp. 3001-03

motociclista, así que no estaba ejerciendo ninguna actividad catalogada como peligrosa, luego, la presunción se mantiene incólume en quienes sí estaban ejerciendo dicha actividad -conductor de la buseta y motociclista-, debiendo los demandados para exonerarse de responsabilidad probar culpa de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito o culpa de un tercero, tal como concluyó la juez de instancia.

Y precisamente, la demandada TRANSPORTES MONTERO S.A., pretende exonerarse de responsabilidad, alegando una culpa exclusiva de un tercero, toda vez que, conforme al informe de tránsito, el accidente no ocurrió al interior de la bomba de gasolina como lo afirma la parte demandante, sino en la vía por donde transita habitualmente el transporte público, invadiendo el motociclista el carril, fuera que no contaba con licencia de conducción y para el momento de los hechos se encontraba realizando una actividad de transporte ilegal.

Y ciertamente, obra en el expediente el informe policial de accidentes de tránsito de 13 de febrero de 2010, pero dicho documento en sí mismo nada clarifica sobre la forma como ocurrieron los hechos, tan solo da cuenta que se registró la colisión entre la buseta de placas WBB405, conducida EDWIN QUIROZ VILLALOBOS, de propiedad de RICARDO ANTONIO GÓMEZ BOTERO y afiliado a TRASPORTES MONTERO S.A. y, la motocicleta de placas DAK82B, conducida por GUILLERMO CASTILLO CÁRDENAS; quedando consignada la versión de cada uno de los involucrados, que en todo caso, resultan contradictorios, pues, mientras el conductor de la buseta manifestó que *“venía a coger la vía para el SAO y la moto salió...”*, el conductor de la motocicleta señaló que *“venía saliendo de la isla de ... cuando siento la buseta que golpea”*, sin que se haya definido una hipótesis o causa probable del caso, menos aparece corroborada en el expediente.

En el mismo sentido, el testimonio que rindió el agente de tránsito que atendió el hecho, MANUEL PASTRANA, tampoco fue concluyente, debido a que afirmó haber llegado al lugar 15 minutos después de los hechos, dejando registrada la versión de cada uno de los conductores, pero no las eventuales causas; quedando el caso a disposición de la Fiscalía y, que no logró precisar si la buseta se encontraba tanqueando en la estación de gasolina o efectuando un cruce, es decir, para nada convalida la postura del recurrente.

En realidad de verdad, el informe de accidente de tránsito no cuenta con ningún dato determinante o concluyente, a partir del cual sea posible inferir con algún grado de certeza, que la actuación desplegada por el motociclista GUILLERMO CASTILLO CÁRDENAS, fue la causa efectiva o eficiente del accidente que originó las lesiones de la demandante. Y es que, para que dicho documento tenga fuerza persuasiva debe registrar hechos ciertos y verificables, que en todo caso, requieren estar corroborados o ser convergentes con el resto del material probatorio, ya que es elaborado a partir de evidencias tomadas por un sujeto con autoridad en el lugar momentos después que ocurrieron los hechos, no en vano la Corte Constitucional ha dicho:

*“En este orden de ideas, el informe descriptivo elaborado por una autoridad de tránsito, constituye un importante instrumento al servicio de la administración de justicia como quiera que en éste se da cuenta de la ocurrencia de un hecho, en algunos casos con implicaciones de orden civil pero en otros además con carácter penal, en el que aparecen identificados los conductores implicados, así como consignados datos sobre las posibles condiciones en que aquél tuvo lugar, y además estará firmado por los conductores o en su defecto por un testigo. **Datos todos estos que resultan fundamentales para orientar una futura investigación o proceso y a partir los cuales se puede producir la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos.**” (Sentencia C-429 de 2003) (Lo resaltado por fuera del texto original)*

Quiere decir, entonces, que si bien el informe de tránsito constituye una pieza procesal importante por recabar datos, huellas o vestigios en

el escenario de los hechos, claro está, cuando se ejerce la cadena de custodia, lo cierto es que, debe ser concluyente al momento de determinar la causa real y efectiva del accidente, por lo menos verificable con otros medios de prueba, pero en el caso, para nada refiere como causa determinante el actuar imprudente del motociclista como plantea el recurrente, así que todo queda en el campo de la especulación y las meras conjeturas.

Por el contrario, se contó con el relato de EDITH FERNÁNDEZ, que minutos antes del accidente se encontraba con la demandante, pudiendo advertir que el suceso ocurrió dentro de la estación de gasolina; que la buseta se encontraba llena de pasajeros y que ANA resultó lesionada por el choque de aquella con la motocicleta que, acabada de tomar como pasajera, sin referir algún comportamiento culposo del motociclista.

4. Otro de los argumentos de los recurrentes para endilgar la culpa exclusiva del tercero, es que el motociclista no contaba para el momento de los hechos con la licencia de tránsito, lo que indefectiblemente configura una infracción a las normas de tránsito que acarrea sanciones, pero dicha falencia no es suficiente para dar por acreditada la culpa o el nexo causal; en términos más precisos, no es posible colegir que la ausencia de licencia del motociclista influyó de manera inequívoca en la colisión, a lo sumo, ese hecho probado – ausencia de licencia, permitiría inferir con cierto grado de probabilidad que el motociclista no contaba con la pericia en el manejo de motos. Así que, para alcanzar el grado de certeza, se requiere contar con otros medios de pruebas que coadyuven la hipótesis planteada.

Con todo, no quiere decir que la Sala esté desconociendo la importancia administrativa que tiene la licencia de conducción, tal como

lo indican los artículos 2, 17 y 131 del Código Nacional de Tránsito, donde la licencia es un *“Documento Público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional”*, pero lo cierto

es que, conducir un vehículo sin contar con la respectiva licencia o con una no vigente, es una conducta que tipifica una infracción y genera multa, pero no es prueba suficiente o determinante para imputarle el hecho dañoso, para tal efecto, debe demostrarse la relación y grado de efectividad en la producción del hecho. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

«que la ausencia per se de dicho requisito o documento, no se puede configurar por si solo en causa determinante de un accidente, máxime cuando se tiene por probado que el accidente no obedeció a la falta de pericia de dicho conductor o que este individuo nunca ha tenido licencia de conducción, lo que podría llegar a inferirse que si nunca ha tenido licencia, es porque no cumple con los requisitos mínimos para conducir un vehículo; vale la pena aclarar que ese no es el caso que nos ocupa»⁹

Y tampoco podría achacarle la asunción de dicha sanción a la víctima, como se pretende, pues se ha demostrado que la misma se desplazaba como pasajera, sin que se haya demostrado que tuviese o no conocimiento de la ausencia de la referida licencia.

5. Por otro lado, el rompimiento del nexo causal, se pretende igualmente edificar en el hecho que el tercero -motociclista, para el momento del accidente se encontraba ejerciendo una actividad de transporte ilegal, pero la verdad es que, se trata de una práctica que, si bien no está debidamente regulada, no es esta la instancia pertinente para dar este debate, ya que corresponde a otro ente estatal legislar sobre lo pertinente.

⁹ Corte Suprema de Justicia Sentencia SC002-2018 de 12 de enero de 2018.

Pero al margen de ser catalogada como informal o ilegal, lo cierto es que, dicha actividad no fue la determinante en la causación del hecho, luego, no puede tomarse como eximente de responsabilidad, es decir, la presunción de culpa que pesa sobre quien ejerce la actividad peligrosa y de quien es su guardián se mantiene incólume.

De este modo, ante la orfandad probatoria en demostrar sin equívocos la causa externa que refiere la demandada recurrente, esto es, la culpa de un tercero, se compromete la responsabilidad de los demandados en el hecho dañoso, sin alcanzar a derruir la presunción de culpa que llevan a costas, por estar precisamente desarrollando una actividad considerada como peligrosa.

Y valga agregar, que si bien la demandada EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., refiere que el daño no fue causado por un hecho propio del asegurador, ni por sus dependientes, lo que resulta ser cierto; no puede desconocer que media un contrato de seguro de responsabilidad conforme a la póliza AA12230 en la que figura como tomador la demandada TRASPORTES MONTERO S.A. y asegurado RICARDO ANTONIO GÓMEZ BOTERO con vigencia de 5 de agosto de 2009 a 5 de agosto de 2010, lo que indicaría que estando comprometida la responsabilidad de su asegurado debe entrar a resarcir los perjuicios, estando dentro de la cobertura la lesión o muerte de una persona y comprendido en las condiciones generales como riesgo asegurado los daños corporales causados a las personas (fls 245-247 C1), fuera que la víctima ejercita la acción directa contra el asegurador conforme lo prescribe el artículo 1133 del Código de Comercio, estando acreditados los supuestos de la norma que obligan a la aseguradora a resarcir los perjuicios dentro del marco del contrato de seguro.

6. En punto de los cargos formulados por la parte actora, se reprocha al fallo de instancia haber realizado una reducción al reconocimiento de la indemnización, pues a su consideración, la misma no resulta procedente, dado que los parámetros descritos en el artículo 2357 del Código Civil, son aplicables cuando la víctima concurre en la generación del daño, hecho que no ha sucedido en el caso.

Y en efecto, el artículo 2357 del Código Civil consigna que la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. En palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, hay lugar a reducción de la indemnización cuando la víctima no tuvo ninguna posibilidad de crear el riesgo que ocasionó el daño o de participar en su producción; pero sí tuvo la posibilidad de evitar la creación de su propio riesgo de exponerse imprudentemente al daño que otra persona generó.

Descendiendo al asunto que concita la atención de la Sala, no reposa en el expediente prueba alguna que se perfile a demostrar que la víctima haya intervenido en la producción de daño y menos evitar la creación de su propio riesgo, pues tal como quedó acreditado, al momento del accidente no se encontraba ejerciendo ninguna actividad peligrosa, comoquiera que se desplazaba como parrillero o pasajero del motociclista, sin poder advertir que aquél no poseía licencia de conducción, por lo que, tal argumento no sería una razón válida para la aplicación de la reducción de la indemnización, en estos casos, el deber de conducta no llega hasta exigir licencia o pericia al piloto de la moto.

Ahora, el moto-taxismo configura una fuente de ingreso y genera una confianza legítima al usuario, que hace que tome ese medio de transporte como regular y amparado por las autoridades, lo que

descarta, que al escoger dicho medio esté creando su propio riesgo frente a los eventuales daños que pueda sufrir.

Siendo ello así, para la Sala, no están dados los presupuestos necesarios para aplicar la reducción en la indemnización como refirió la jueza de instancia, pues, claramente se ha acreditado que la demandante ANA DUARTE no tuvo ninguna participación en la producción del daño causado.

4.1 En esa medida, y comoquiera que fue reconocido por el a quo como daño emergente el valor de \$4.761.250, a favor de ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, que en todo caso no fue controvertido, debe ser reconocido en su totalidad. No obstante, se observa que las facturas y documentos allegados al expediente, solo acreditan la suma de **\$4.091.300.**, por lo que será este valor que será el reconocido.

4.2. En lo que respecta al lucro cesante, la jueza de instancia consideró que no resulta procedente comoquiera que la demandante ANA LUCIA DUARTE laboró después de ocurrido el accidente y que inclusive actualmente se encuentra laborando.

Y es cierto, obra en el expediente certificación laboral que indica que la demandante ANA LUCIA DUARTE ALMARIO laboró en misión para la empresa PROLECHE S.A., con un contrato por obra desde el 27 de diciembre de 2011 hasta el 4 de enero de 2013, en el cargo de vendedor con una asignación salarial básica mensual de \$589.500, salario mínimo de la fecha, y en su interrogatorio manifestó que actualmente se encuentra laborando con otra empresa desde hace 7 años bajo vinculación de contrato indefinido, teniendo conocimiento de su accidente.

No obstante, no puede pasar por alto la Sala que, la demandante ANA LUCIA DUARTE ALMARIO sufrió un daño cierto en su salud, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 13 de febrero de 2010, que generó para ella una pérdida de su capacidad laboral del 25.15%, daño que, en todo caso, no ha sido resarcido, por lo que resulta procedente su reconocimiento.

Y es que, si la reparación busca dejar a la víctima en la misma situación en que se encontraba o en condiciones parecidas, es necesario alcanzar una reparación *in integrum*, basada en justicia y equidad conforme al artículo 16 de la ley 446 de 1998, el cual ordena *«que al afectado por daños en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior..., y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez ‘tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio’ (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01)» (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.º 2009-0014-01). (Sent. SC5340-2018)*

Es decir, quien con su actuar culposo o doloso cause daño a otro debe resarcir todo el daño y nada más que el daño conforme al artículo 2341 del Código Civil, con independencia si la víctima sigue laborando con el mismo sueldo que devengaba o uno menor a futuro, debido a que aun así el daño a la salud persiste y la pérdida parcial de su capacidad laboral no desaparece.

Por consiguiente, en cuanto al lucro cesante, se deben aplicar los lineamientos de la Corte Suprema, así que, estando acreditado que la demandante devengaba el salario mínimo legal, que actualmente

corresponde a \$1.000.000 (Decreto 1724 de 2021), se tomará para efectos de tasar el daño. En efecto la Corte ha dicho “*el salario mínimo legal a tener en cuenta es el hoy vigente, el cual trae “(...) implícita la pérdida del poder adquisitivo del peso (...)” ya que hasta ahora se haría efectiva la indemnización, máxime cuando no se adosó la prueba del salario ...*”)¹⁰. A dicha suma se le incrementará un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un monto total de \$ 1.250.000, luego, si la pérdida de la capacidad laboral atribuida es del 25,15%, la eventual pérdida sería de \$314.375. Así tenemos:

CONCEPTO	VALOR
Salario inicial	1.000.000,00
Incremento por prestaciones laborales que recibe el trabajador (25%)	250.000,00
Salario Base de Liquidación	1.250.000,00
Interés aplicable (6% Anual = 0,5% mensual = 0,4867% efectivo mensual)	0,004867
LIQUIDACIÓN	
Porcentaje Pérdida de Capacidad Laboral	25,15%
Parte del salario que deja de recibir el (la) demandante (LC)	314.375,00
Fecha del accidente	13/02/2010
Fecha de la liquidación	27/09/2022
Expectativa de vida de la víctima al momento del accidente (años)	50,10
Fecha vida probable de la víctima	21/03/2060
LUCRO CESANTE PASADO= (LC * Sn)	
Meses transcurridos entre el accidente y la fecha de la liquidación (n1)	151,43
$Sn = \frac{(1+i)^{n1} - 1}{i} \quad Sn = \frac{(1+0,004867)^{151,43} - 1}{0,004867}$	223,11
TOTAL LUCRO CESANTE PASADO (LC * Sn)	70.141.416,13
LUCRO CESANTE FUTURO = (LC * Ra)	
Meses transcurridos entre la fecha de la liquidación y la fecha de vida probable de la víctima (n2)	449,77
$Ra = \frac{(1+i)^{n2} - 1}{i(1+i)^{n2}} \quad Ra = \frac{(1+0,004867)^{449,77} - 1}{0,004867(1+0,004867)^{449,77}}$	182,33
TOTAL LUCRO CESANTE FUTURO (LC * Ra)	57.318.759,33
TOTAL LUCRO CESANTE	127.460.175,46

Siendo ello así, el total por lucro cesante ascendería a \$127.460.175,46. No obstante, para guardar fidelidad al principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso,

¹⁰Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC5885-2016.

debe tenerse en cuenta que, las pretensiones de la demanda fueron fijadas en **\$71.282.545.**, que debidamente indexada con la formula antes referida, desde la presentación de la demanda (julio de 2019) a la fecha, alcanza la cifra de **\$84.134.731**, la cual equivalente a los perjuicios materiales que serán reconocidos.

INDEXACIÓN		Fórmula: $\frac{KI = (K * Ipc\ final)}{Ipc\ inicial}$	
Donde:	Ipc inicial	Índice de las Series de Empalme publicadas por el DANE, vigente para la época desde la cual se debe indexar	
	Ipc final	Índice de las Series de Empalme publicadas por el DANE, vigente para la época hasta la cual se debe indexar	
	K	Capital a indexar	
	KI	Capital Indexado	
Datos:	K	Capital a indexar	= \$ 71.282.545,00
	Ipc inicial	Julio 2019	= 102,94
	Ipc final	Agosto 2022	= 121,50
Desarrollo: $\frac{\$ 71.282.545,00 * 121,5}{102,94}$		$\frac{8.660.829.218}{102,94}$	CAPITAL INDEXADO (KI) \$ 84.134.731,08

Lo anterior, atendiendo la figura de corrección monetaria ampliamente reconocida por la Corte Suprema de Justicia, y tomando como base la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, a fin de preservar los principios de justicia, reparación integral y equidad, especialmente si se tiene en cuenta que, para el caso, la demanda data de 2019 y que la pretensión aludida fue realizada atendiendo los valores de la época en que se produjo la lesión al respectivo bien jurídicamente tutelado.

Y es que sobre ello, ha venido refiriendo la Corte Suprema de Justicia que *“En todo caso, la naturaleza de la indexación no es resarcitoria ni hace parte del objeto de la pretensión, sino que es una simple variación de las condiciones externas del perjuicio, debido a la depreciación que sufre el dinero en el tiempo por la incidencia de ciertos factores de la economía; por lo que el juez está*

facultado para decretarla aún de oficio, pues lo contrario supondría la aceptación de una situación inequitativa en contra del acreedor.”¹¹

Concluyendo en otra oportunidad que:

“el Tribunal no se equivocó al decidir en la forma como lo hizo, dado que en verdad, en ésta no se concedió más de lo requerido, sino la misma cantidad, pero traída a valor presente, comportamiento judicial que lejos de desbordar el orden jurídico, lo respeta y preserva, mayor aún, si se tiene en cuenta que la actualización del monto del perjuicio, lo que comporta es desarrollo del principio de equidad y plenitud del pago implícitamente solicitado; por lo que tal reajuste no puede ser considerado simplemente restitutorio o reparador, sino como un factor compensatorio, con el que se mantiene el poder adquisitivo de la moneda, cuando por el transcurso del tiempo, ésta se devalúa.”¹²

En esa justa medida, tal como se afirmó en líneas precedentes, por congruencia de la sentencia, se reconocerá como perjuicio material, por lucro cesante, la suma de **\$84.134.731**.

4.3. En cuanto a los daños extrapatrimoniales, las Altas Cortes han reconocido, el daño moral y el daño a la vida en relación y/o fisiológico.

4.3.1 Sobre el primero de ellos, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que su determinación está sujeta a las circunstancias fácticas de cada caso, las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, intensidad de la lesión, los sentimientos, dolor o aflicción, conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador, específicamente ha indicado:

“Para concluir, en preservación de la integridad del sujeto de derecho, el resarcimiento del daño moral no es un regalo u obsequio gracioso, tiene por causa el quebranto de intereses protegidos por el ordenamiento, debe repararse in casu con sujeción a los elementos de convicción y las

¹¹sentencia CSJ SC, 18 Dic. 2012, Rad. 2004-00172

¹²CSL. SC 6185-2014 de 16 de mayo de 2014, Exp. 08001-31-03-011-2008-00263-01

*particularidades de la situación litigiosa según el ponderado arbitrio iudicis, sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador*¹³

El método de cuantificación es motivo de serios reparos, en especial, frente a la inequidad que generan las fórmulas reparatoras utilizadas por las Cortes, dejándose al *arbitrium iudicis* su tasación.

Y aunque se ha dicho que el daño debe ser probado, no se trata de una regla infranqueable, debido a que pueden existir eventos en donde el hecho físico pueda generar *per se* un daño, como el caso de la pérdida de la capacidad física del que se presume generó en la actora un trastorno que le impidiera continuar con sus actividades cotidianas o que tengan incidencia en esta. Ese *arbitrio iudicis* deja a buen juicio del fallador tasar el daño inmaterial, sirviendo como guía los techos establecidos tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Consejo de Estado¹⁴.

En el presente asunto, la juez de instancia reconoció por dicho concepto el valor de \$15.000.000.00 a favor de la demandante ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, y \$8.000.000 para su cónyuge ELÍCEO EULOGIO FERNÁNDEZ, no obstante se hace necesario ajustarlo, atendiendo que si bien, las lesiones no generaron una invalidez o una mengua total en su capacidad productiva, lo cierto es que el suceso generó una secuela en el cuerpo de la demandante, y una pérdida de la capacidad laboral del 25.15%, lo que *per se* generó un traumatismo en el espíritu de la persona, y a sus familiares, por lo que atendiendo los

¹³CSJ Civil sentencia de 9 julio de 2010, exp. 1999-02191-01.

¹⁴ El Consejo de Estado dese la sentencia del 6 de septiembre de 2001 (exp. 13.232 – 15.646), consideró improcedente la aplicación analógica del artículo 97 del Código Penal y dio cabida al artículo 16 de la ley 446 de 1998, señalando como límite 100 salarios mínimos legales mensuales.

principios de equidad, razonabilidad, reparación integral y proporcionalidad, se deba tasar el daño moral en un equivalente a \$ 23.000.000. a favor de la demandante ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, y \$15.000.000 para su cónyuge ELÍCEO EULOGIO FERNÁNDEZ teniendo en cuenta algunas reglas o parámetros establecidos por la Corte¹⁵.

4.3.2. Por su parte, el daño fisiológico, daño a la vida de relación o alteraciones a las condiciones de existencia¹⁶, ha sido reconocido por las Altas Cortes como un daño extrapatrimonial autónomo y que repercute en la esfera externa del individuo, siendo descrito por la Corte Suprema de Justicia como *“las situaciones de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o económico”*, luego, como lo ha plasmado la Corte corresponde a un daño diferente al moral.

En un pronunciamiento más reciente, al precisar el alcance y contenido de este derecho la Corte puntualizó:

“se apreciaría a partir de aquellas manifestaciones de la afectada de las que pudiera inferirse la disminución de su interés por participar en actividades de las que antes disfrutaba o de aquellas que le generaban algún regocijo en los ámbitos individual, familiar o social, con fines recreativos, culturales, de relaciones sociales, y en general de aquellas en las que aprovechaba su

¹⁵CSJ Sentencia SC5686-2018

¹⁶Fue reconocido por primera vez por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 13 de mayo de 2008, exp. 1997-09327-01 (Reiterada, entre otras, en: SC 9 dic. 2013, rad: 2002-00099-01; SC5050-2014 y SC5885-2016.), aunque de tiempo atrás ya lo venía reconociendo como un perjuicio autónomo por el Consejo de Estado.

tiempo libre, en compañía de su difunto esposo”. (CSJ, sent. SC-665 de 7 de marzo de 2019, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque)

Lo que pone de presente que corresponde a todas aquellas actividades lúdicas, placenteras, personales, culturales, deportivas o de simple rutina de las cuales se priva el actor¹⁷. Y aunque se ha dicho que por regla general es necesario demostrar las repercusiones del daño en la esfera externa del individuo, no menos cierto es que, existen situaciones que *per se* desencadenan una alteración en las condiciones de vida del individuo, es decir, le impiden desenvolverse normalmente como lo venía haciendo, en otro sentido, por sus mismas limitaciones físicas se priva de ejecutar actividades placenteras o de agrado, lo que hace que se presuma dicho perjuicio. Así, la Corte Suprema ha dicho «un menoscabo que se evidencia en los sufrimientos por la relación externa de la persona, debido a ‘disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad’, que por eso queda limitado a tener una vida en condiciones más exigentes que los demás, como enfrentar barreras que antes no tenía, conforme a lo cual actividades muy simples se tornan complejas o difíciles» (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.º 2009-00114-01)¹⁸.

Asimismo, la Corte ha referido que es posible que el juez para reconocer el perjuicio pueda apoyarse en “*hechos notorios, los que -se resalta- deben examinarse en cada caso concreto por el funcionario judicial con miras a evitar su uso desbordado e injusto*” (SC4803, 12 de dic. 2019, expediente 73001-31-03- 002-2009-00114-01)¹⁹.

¹⁷ Sentencia SC3919 de 2021

¹⁸ Citada en sentencia SC3919 de 2021

¹⁹ Citada en sentencia SC4124 de 2021

En cuanto a la cuantificación del daño, también se ha dicho que queda al *arbitrium iudicis*, estableciendo la jurisprudencia algunos derroteros en casos particulares, atendiendo la magnitud de la afectación²⁰.

Para el caso en estudio, ANA LUCIA DUARTE ALMARIO como consecuencia del accidente, quedó con una pérdida de su capacidad laboral del 25,16% (fl 160 C1), lo que permite inferir con alto grado de convicción que su nueva situación física altera su vida personal, ya que tendrá que desplazarse con dificultad, privarse de algunas actividades lúdicas o deportivas, en últimas, realizar otras con dificultad, además que como lo informó la testigo EDITH FERNÁNDEZ, la demandante se ha privado de utilizar cierto tipo de prendas de vestir para no mostrar las cicatrices que presenta en su pierna, por lo que dicho valor también será ajustado a la suma de \$23.000.000.,

En cuanto al reconocimiento al daño a la vida de relación a favor del demandante ELICEO EULOGIO FERNÁNDEZ, no se accederá comoquiera que este no viene demostrado, tal como concluyó la juez de instancia, no siendo suficiente el simple dicho de los demandantes.

5. Ahora, de acuerdo a lo indicado en la póliza AA12230 expedida el 29 de septiembre de 2009, el valor asegurado total asciende a \$ 89.442.000, valor que debe ser indexado a fin de preservar los principios de justicia, reparación integral y equidad, comoquiera que el valor asegurado data de 2009, fecha de expedición de la póliza.

²⁰Ver entre otras: Sentencia SC de 13 may. 2008, rad. 1997-09327, SC4803 de 2019, rad. 2009-00114-01), CSJ SC16690 de 2016, rad. 2000-00196-01), SC del 09 de diciembre del 2013, exp. 2002-00099-01,. SC del 19 de diciembre del 2018, exp. 2004-00042-01

INDEXACIÓN		Fórmula: $\frac{KI = (K * Ipc \text{ final})}{Ipc \text{ inicial}}$	
<i>Donde:</i>	Ipc inicial	Índice de las Series de Empalme publicadas por el DANE, vigente para la época desde la cual se debe indexar	
	Ipc final	Índice de las Series de Empalme publicadas por el DANE, vigente para la época hasta la cual se debe indexar	
	K	Capital a indexar	
	KI	Capital Indexado	
<i>Dat os:</i>	K	Capital a indexar =	\$ 89.442.000,00
	Ipc inicial	septiembre 2009 =	71,28
	Ipc final	Agosto 2022 =	121,50
<i>Desarrollo:</i> $\frac{\$ 89.442.000,00 * 121,5}{71,28} =$		$\frac{10.867.203.000}{71,28} =$	CAPITAL INDEXADO (KI) \$ 152.457.954,55

En esa medida, el valor asegurado debidamente indexado, corresponde a la suma de **\$152.457.954**, debiendo la Aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS O.C., responder por el pago de la condena impuesta hasta el límite del valor asegurado.

V. DESICIÓN

En razón y mérito de lo expuesto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

VI. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3 de la sentencia de 8 de junio de 2022 dictada por el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA dentro del asunto de la referencia. En su lugar se dispone:

“CONDENAR a EDWIN QUIROZ VILLALOBOS, RICARDO GOMEZ BOTERO, TRANSPORTES MONTERO S.A., a pagar las

siguientes sumas de dinero, más intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de esta sentencia hasta que se verifique su pago, a la tasa del 6% anual:

- A favor de ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, la suma de cuatro millones noventa y un mil, trescientos pesos (\$4.091.300.), por concepto de daño emergente.

- A favor de ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, la suma de ochenta y cuatro millones ciento treinta y cuatro mil, setecientos treinta y un pesos (\$84.134.731.), por concepto de lucro cesante pasado y futuro.

- A favor de ANA LUCIA DUARTE ALMARIO, la suma de veintitrés millones de pesos (\$23.000.000) por concepto de daño moral y veintitrés millones de pesos (\$23.000.000) por concepto de daño a la vida en relación.

- A favor del demandante ELICEO EULOGIO FERNÁNDEZ, la suma de quince millones de pesos (\$15.000.000) por concepto de daño moral.

Las anteriores sumas de dinero deberán ser canceladas en el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del fallo.”

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 5 de la sentencia de 8 de junio de 2022 dictada por el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA dentro del asunto de la referencia.

TERCERO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia de 8 de junio de 2022 dictada por el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA dentro del asunto de la referencia.

CUARTO: CONDENAR en costas en esta instancia al apelante vencido, fijar como agencias en derecho dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

QUINTO: ORDENAR remitir el expediente a su lugar de origen.

Firmado Por:

Marcos Roman Guio Fonseca
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Civil Familia
Tribunal Superior De Cartagena - Bolivar

John Freddy Saza Pineda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil Familia
Tribunal Superior De Cartagena - Bolivar

Oswaldo Henry Zárate Cortés
Magistrado
Sala Civil Familia
Tribunal Superior De Bolivar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f67823d4d3afc6cd5eaa037210cbcbd37f4107ddc768adca23b77d02d219badc**

Documento generado en 30/09/2022 09:47:08 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>